

## EL PODER DE LOS MEDIOS

En la presidencialista sociedad panameña, en la que todo gira en torno al ocupante del Palacio de las Garzas, los ciudadanos son vistos desde el poder como una clientela a la que hay que seducir cada cinco años, con promesas a los que todavía creen en ellas o con dinero y prebendas a los que entienden que mentir es un comportamiento consustancial al político. En el mundo de hoy, los medios se han convertido en el principal instrumento de esa seducción. A pesar de que en campaña han sabido utilizar a los medios como una herramienta eficaz del clientelismo político, una vez en el gobierno, descubiertas sus verdaderas intenciones, poder y medios terminan irremediablemente enfrentados.

Fernando Martínez García

*jornando@cwpanama.net*

Periodista y cineasta. Ha sido corresponsal en Panamá del diario *La Jornada de México* (1990 a 2002), correalizador del programa diario de radio Análisis de la Noticia dirigido por Mario Velásquez entre 2004 a 2009. Ha escrito y publicado crónicas y artículos de análisis en revistas y medios locales. Como cineasta ha sido fotógrafo, camarógrafo, guionista y realizador de documentales y videos de distintos géneros. Subdirector del Sistema Estatal de Radio y Televisión (2004-2009) y actualmente es subdirector del Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá. Coautor de *El libro de la Invasión*, Fondo de Cultura Económica, Colección Tierra Firme, México, 1998.

## La historia por repetirse

Si es cierto que la historia se repite en espiral y si, como afirmó Marx, esta se repite primero como tragedia y luego como comedia, la trayectoria de la sociedad panameña de los últimos cuarenta años es una nítida demostración de este principio.

La tragedia comenzó en 1968, cuando el pequeño grupo de familias acostumbrado a disputarse entre sí el poder, caracterizado por el presidencialismo y un arraigado clientelismo político, condujo al país a la mayor y más profunda crisis de la historia republicana<sup>1</sup>.

Los procesos electorales se habían degradado al punto de convertirse en subastas públicas y los políticos recurrían al electorado cada cuatro años para realizar promesas que nunca cumplirían. Los medios de comunicación, la mayoría en manos de esas mismas familias, también habían sucumbido a la tentación de apostar desde ellos a favor de sus intereses, sacrificando la imparcialidad que debía regirlos. La libertad de expresión era un mito, puesto que cada gobierno hacía lo posible por acallar a sus adversarios políticos y los medios alternativos, especialmente los de organizaciones populares o de izquierda, estaban prohibidos y, en consecuencia, circulaban en la clandestinidad. Especialmente, el período comprendido entre el fin de la Segunda Guerra Mundial (conocido también como el macartismo) y los años finales de la década de los sesenta, fueron los de mayor agitación social, confrontaciones callejeras y represión.

Adicionalmente, Panamá era, desde inicios de siglo, el portaviones de la estrategia intervencionista de Estados Unidos en el continente y su dinámica interna –política, económica, social y cultural– estaba supeditada a los intereses norteamericanos. Panamá era un laboratorio de pruebas y una escuela de formación permanente de todos los ejércitos latinoamericanos en la represión y persecución de la llamada amenaza comunista en la región.

La del 1968 fue una crisis política, resultado del agotamiento de un modelo autoritario de gestión.

Por esa razón, esos comicios considerados entre los más sucios de la historia del país, estuvieron empañados por la violencia y la represión, los abusos desde el poder, la falta de garantías, numerosas y sustentadas denuncias de compra de votos, actos de coacción, robo de urnas, entre muchas otras formas fraude de ilegalidad.

A las fuerzas armadas, la mayoría de las veces aliadas y cómplices del poder, represores oficiosos del descontento popular, también les correspondía actuar

<sup>1</sup> El capítulo XV de la obra Estudios sobre el Panamá Republicano, de Celestino Araúz y Patricia Pizurno se califica al período de 1964 a 1968 como: Descomposición crisis política y social. Ediciones Manfer, 1996.

como árbitro obligado y no necesariamente imparcial de las confrontaciones entre los partidos o clanes económicos que cada cuatro años se disputaban el favor del electorado<sup>2</sup>. Si bien es cierto que la fuerza pública da el golpe de estado, primero como un acto de supervivencia coyuntural, porque su propia institucionalidad y autonomía castrense estaba amenazada, también lo hace para aliviar el enorme desgaste y llenar el vacío que las pugnas interoligárquicas había provocado. Los militares no tenían en ese momento un proyecto político, ni la intención de permanecer en el poder indefinidamente, simplemente se dan cuenta de que los partidos políticos tradicionales, tampoco tenían un plan para sacar al país de la crisis. Por ello, Torrijos decide ponerse al frente de un proceso social y político inédito en la historia, buscando establecer alianzas con los sectores populares, tradicionalmente marginados. Algunos analistas e historiadores sostienen que la intención originaria de este nuevo pacto, denominado por Torrijos como “yunta pueblo-gobierno”, era dar legitimidad al golpe, pero los cambios ocurridos en la década siguiente demuestran una trascendencia mucho mayor.

Hoy, a más de 40 años, pareciera que las causas que condujeron a aquella crisis, a saber, el desprestigio y total desconfianza en los partidos políticos, la democracia limitada a lo electoral, la institucionalidad secuestrada por el presidencialismo autoritario, y la postergación de una angustiante y creciente deuda social, emergen nuevamente. ¿Está la historia por repetirse?

## Proyecto Torrijista y medios de comunicación

Una de las primeras acciones del golpe militar fue el cierre y control de los principales medios masivos de comunicación (el caso más notorio fue la Editorial *El Panamá América*, propiedad de la familia Arias, pasó al control de los militares).

A pesar del carácter represivo de los primeros años que siguieron al golpe y aunque la relación gobierno y medios no fue una prolongada luna de miel, durante el gobierno de Omar Torrijos<sup>3</sup>, quizás como resultado de la necesidad de legitimar el

<sup>2</sup> “Las contradicciones en el seno de la clase dominante llegaron a tal gravedad que meses antes de la definición electoral de 1968 Panamá tuvo dos presidentes, el electo en 1964, Marcos Robles y Max Del Valle, nombrado como tal por la Asamblea Nacional. La Guardia Nacional hubo de dirimir la disputa a favor de Robles asumiendo así una función de arbitraje (...)” Ricaurte Soler, Panamá, historia de una crisis. Siglo XXI Editores. México, 1989.

<sup>3</sup> Torrijos asume el control político del país el 16 de diciembre de 1969, da inicio a un “repliegue” de los militares a los cuarteles tras la firma de los tratados el 7 de septiembre de 1977. Torrijos muere en un sospechoso accidente aéreo el 31 de diciembre de 1981. Aristides Royo como figura de transición asume la presidencia en 1978.

proceso de transformaciones sociales puesto en marcha, se produjo un crecimiento significativo de los medios.

Persistieron tentativas de limitar la libertad de expresión y controlar a los medios desde el Estado, incluidos hechos lamentables como, por ejemplo, el ataque realizado contra *Radio Impacto*, una emisora del dirigente civilista Alberto Quirós Guardia, pero también se dieron esfuerzos sostenidos por tener una relación armoniosa y de respeto.

En algunas coyunturas, la agenda de Estado, en especial la lucha y las negociaciones para la firma y ratificación de los nuevos tratados del Canal, por su magnitud a escala nacional e internacional, dominó en períodos importantes el contenido de los medios, convirtiéndose en el eje articulador de un debate nacional en el que participó oficialismo y oposición. El gobierno propició ese debate, incluso lo usó de herramienta de presión hacia su contraparte norteamericana en el proceso negociador (visibilizando la existencia de posiciones mucho más radicales que las del gobierno, que no creían en la negociación como método de lucha) y se puede afirmar que todos los medios en ese momento consideraron inconveniente tratar de imponer una agenda distinta. Mario Velásquez gerente de noticias de uno de los dos canales de televisión locales (*RPC, Canal 4 y Televisora Nacional TV2*), informa que el gobierno contrató espacios en la programación de *TV-2* y los puso a la disposición de quienes se oponían a los tratados.

Aunque no existían partidos políticos legalmente constituidos, algunos de sus dirigentes recurrieron a los medios de comunicación para oponerse a Torrijos y a los tratados que su gobierno negociaba con Estados Unidos. La mayoría no creía que los panameños fueran capaces de administrar el Canal y no consideraban conveniente proponer la salida de las bases militares del país. Para ellos la lucha por la soberanía de Panamá sobre la totalidad de su territorio era una consigna comunista. Otro sector de la oposición, basado en la tesis de que primero era “el retorno a la democracia” y después la recuperación del Canal, se abstuvo.

El caso del Partido Demócrata Cristiano es ejemplar porque nunca abandonó su rol de oposición al régimen militar en todos los terrenos, pero no desperdició las rendijas que le abría el sistema y continuó organizándose y movilizándose, cosa que no hizo el resto de los partidos (que prefirieron permanecer en un virtual estado de hibernación). Se ensanchó entonces el espacio para la comunicación ciudadana gracias a la proliferación de las organizaciones sociales, estudiantiles (de distintas tendencias ideológicas), sindicatos (antes de 1968 eran tan perseguidos que casi no existían en el país), organizaciones campesinas (asentamientos, juntas agrarias, cooperativas), juntas comunales y locales, comités de salud, organizaciones gremiales de profesionales, femeninas, etc.

Todo este activismo generó formas propias de comunicación, mucho más directas y horizontales que las tradicionales. De este período es el quincenario Bayano (1974-1989), que se convierte en expresión de un influyente sector de izquierda dentro

del torrijismo y que jugó un papel destacado en la movilización social que sirvió de soporte a las negociaciones con Estados Unidos.

Torrijos, que no tenía dotes de oratoria, sí sabía, en cambio, encontrar la cercanía necesaria para establecer una identificación personal con sus interlocutores, no tenía facilidad de palabra, pero tenía la magia de saber aproximarse, escuchar y ser escuchado y convencer al panameño popular. Su “patrullaje doméstico” inaugura una forma de gobernar/comunicar, de contacto directo con la gente, inédita en la historia nacional.

Es durante este período que se realizan los primeros esfuerzos por crear medios de comunicación estatales, prensa, radio y televisión.

En el caso de la Editora Renovación (ERSA) –empresa creada para sustituir en 1969 a la empresa de la familia Arias–, edita los diarios *Matutino*, *Crítica* y *La República*. Según la familia Arias, su empresa fue expropiada por los militares, para Rubén Darío Murgas, director del diario *Crítica* (1974-1981), “la Editorial *El Panamá América* estaba en una virtual quiebra financiera, con una gran morosidad en la deuda que mantenía con el Chase Manhattan Bank, y los militares, a través de un grupo de empresarios asumen la deuda y a la empresa”<sup>4</sup>.

Se crean una agencia estatal de noticias, Panapres, adscrita a la Cancillería y luego a la presidencia de la república. Según el periodista David Carrasco, Panapres es un esfuerzo por romper el aislamiento informativo al que eran sometidos nuestros países y proyectar internacionalmente la lucha por la recuperación del Canal sin depender exclusivamente de las agencias de prensa comerciales<sup>5</sup>.

*Radio Libertad*, se convierte en un poderoso medio de difusión del movimiento social que acompaña al torrijismo. Dotada de la mayor potencia y cobertura de la historia nacional, con programación totalmente propia y noticieros regionales para cada provincia, gracias a que funcionaban como radios separadas que se encadenaban en determinados horarios para los noticieros y la transmisión de eventos especiales. La cadena estaba integrada por *Radio Guaymí* en la provincia de Chiriquí, *Radio Urracá* en Veraguas, *La Voz del Teribe* en Bocas del Toro, *La Voz de Herrera* para Herrera, *Radio Victoriano Lorenzo* para Coclé, *Radio Cristobal Colón* para Colón, y la estación central, *Radio Libertad* en la ciudad de Panamá.

<sup>4</sup> ERSA recibía un subsidio estatal que consistía en la exoneración del impuesto de introducción del papel que era pagado al Estado con publicidad en las páginas de sus diarios.

<sup>5</sup> La tesis central era romper el aislamiento informativo en el que se encontraba, no solo Panamá, sino toda Centroamérica. Entrevista con el autor, 31 de marzo 2010. Según Rubén Murgas, Torrijos aprovechó su amistad personal con Zoilo Martínez de la Vega, corresponsal en la región de la Agencia Española de Noticias, para impulsar el surgimiento de la Agencia Centroamericana de Noticias, Acan-Efe.

Del lado de la oposición, dos figuras del panameñismo, Louis Martins y Miguel Ángel Moreno Góngora fundaron el diario *Ya*, de corta duración.

El 8 de agosto de 1980 un grupo importante de figuras de oposición e independientes (sin militancia partidista previa) encabezados por Roberto Eisenman funda el diario *La Prensa*, medio que muy rápidamente pasa a jugar un papel central en la lucha contra el proyecto político liderizado por Torrijos.

## El norieguismo, nueva crisis e invasión

Cuando Torrijos muere el 31 de julio de 1981, había iniciado el proceso que el mismo denominó el “repliegue de los militares a los cuarteles”, que implicaba preservar parte de la institucionalidad construida durante la década de los setentas (sistema de representantes de corregimiento, juntas comunales y locales, más de mil comités de salud, más de 300 asentamientos campesinos, etc.) y la transición gradual hacia las formas convencionales de institucionalidad democrática liberal. Se parte del supuesto de que con la legalización de los partidos políticos, de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones generales directas el poder comenzaría a gravitar nuevamente en los civiles y en la clase política. Para Torrijos este proceso no implicaba sacrificar lo esencial de lo alcanzado por el movimiento social que hizo posible el pacto social que condujo a la firma y ratificación de los Tratados Torrijos-Carter, por el contrario, construir un nuevo acuerdo nacional, para enfrentar el problema de la deuda social, debía ser el nuevo gran objetivo del torrijismo. Es decir, Torrijos confiaba en el liderazgo político alcanzado y en la acumulación de casi una década de lucha y agitación a favor de la principal causa de los panameños, pero, al mismo tiempo entendía que, para concretar este nuevo consenso nacional, no se podían seguir utilizando los mismos “instrumentos de navegación”. Adicionalmente, una nueva ola conservadora se inauguraba en el mundo con la llegada al poder de Ronald Reagan, un acérrimo enemigo de los Tratados Torrijos-Carter<sup>6</sup> y de la devolución del canal a los panameños.

La cúpula militar que se instala en la comandancia tras su muerte, no solo abandona la visión y compromiso de Torrijos sino que toma la dirección contraria para mantenerse en el poder. Con este alejamiento de la ruta propuesta por Torrijos, a partir de la convocatoria a elecciones generales directas en 1984, se fue acentuando el clientelismo, tanto en lo interno de las fuerzas torrijistas como en la renacida partidocracia.

<sup>6</sup> Los tratados establecían, además del traspaso de la administración de la vía interoceánica, un cronograma de entrega gradual de tierras, aguas, instalaciones civiles y militares a Panamá que culminó el 31 de diciembre de 1999.

No debe desconocerse que los gobiernos republicanos de Estados Unidos, Reagan-Bush, hicieron cuanto estuvo a su alcance para revertir el calendario descolonizador pactado en los Tratados Torrijos-Carter y apoyaron por todos los medios a las fuerzas más conservadoras a lo interno del país para evitar la continuidad del proyecto torrijista<sup>7</sup>.

Tras un accidentado camino de represión en las calles, renuncias de mandatarios civiles, de golpes y contragolpes a lo interno de las Fuerzas de Defensa, la cúpula militar encabezada por Noriega, alegando la amenaza real del gobierno de Estados Unidos de mantener bases militares en el país, emprende el camino de regreso al autoritarismo más rampante, desconoce el mandato popular y anula los resultados de las elecciones de 1989, pasa a controlar los tres poderes del Estado (cierra la Asamblea) y, finalmente, asume personalmente la conducción del país.

Como era de esperar, lo que caracteriza a este período norieguista, es su abierta confrontación con los medios de comunicación (aquellos que no controlaba el gobierno). Los medios, a su vez, reflejan las tensiones políticas y sociales por las que pasaba la sociedad, y se convierten en uno de los principales mecanismos de denuncia y oposición al poder. No hay duda de que los medios contribuyeron decisivamente a dibujar el perfil negativo del régimen y a aislarlo políticamente nacional e internacionalmente. Especialmente el diario *La Prensa*, tuvo una gran beligerancia y se convirtió en una poderosa herramienta de movilización ciudadana. Esta confrontación condujo a acciones de abierta represión y censura (ataques y cierres de *La Prensa*), la persecución y exilios de dirigentes de oposición.

Es importante destacar, ahora que se considera imprescindible, tanto para gobernar como para hacer oposición, el acceso a los medios masivos de comunicación, que, cuando hay motivos y no hay medios, los movimientos sociales son capaces de generar sus propios medios alternativos de comunicación eficaces en la canalización del descontento y en la movilización ciudadana. Ese es el caso del movimiento de la llamada Cruzada Civilista, principal fuerza opositora a Noriega, que estando cerrado el diario *La Prensa*, en la coyuntura que antecedió a la invasión militar norteamericana del 20 de diciembre de 1989, supo crear sus propios medios, como la reproducción de hojas volantes que se distribuyeron por miles en todo el país.

La mayoría de los panameños que protestaron en las calles buscaba una salida a la crisis y veían al militarismo como el principal enemigo de la democracia. Otros, se oponían al militarismo nacional y favorecían una acción militar extranjera: pidieron la invasión militar del 20 de diciembre de 1989.

<sup>7</sup> El gobierno de George Bush padre (1989-93) aportó diez millones de dólares a la campaña de Guillermo Endara, bloqueó los activos panameños en la banca norteamericana, realizó toda clase de acciones desestabilizadoras del país, incluidas incursiones militares en territorio bajo jurisdicción panameñas, en la fase previa a la invasión.

El uso desproporcionado del poderío militar norteamericano, las numerosas muertes y heridos, en su gran mayoría civiles inocentes, la destrucción de barrios enteros, de infraestructura estatal y privada, la proliferación de armas en las calles, la desaparición intempestiva de toda autoridad en el país, todos los elementos y consecuencias de una agresión a gran escala sin precedentes en la historia de las intervenciones militares en América Latina, configuraron un trauma para la nación que dejó secuelas en su autoestima de las que todavía, 20 años después, muchos panameños no quieren ni hablar.

## La democracia mediatizada

La intervención militar norteamericana puso fin al gobierno de Noriega, provocó la recomposición y reagrupamiento de los actores políticos, destruyó algunas instituciones y permitió el surgimiento de otras. El fin de la crisis, aunque traumático y doloroso, abrió una nueva gama de oportunidades para hacer avanzar el país.

La invasión también le sirve a la dirigencia ultraconservadora de Estados Unidos para recuperar a un país –de gran importancia geoestratégica– a su esfera de control. Eso explica las tentativas norteamericanas, durante los gobiernos de Endara y Pérez Balladares (1994-99), de renegociar los Tratados del Canal y la suscripción de numerosos acuerdos bilaterales destinados a garantizar formas disimuladas de presencia e intervención en su sistema jurídico, en su espacio aéreo y aguas territoriales. Gracias a ello, Panamá regresa a participar activamente de todas las formas de “cooperación” y alineamiento con Estados Unidos en la región (Plan Colombia, Puebla Panamá, etc.), incluidas las militares, a pesar de que una reforma constitucional, aprobada mediante un consenso entre todos los partidos políticos, proscribió la formación de un ejército nacional en el país.

En materia de medios de comunicación, los diarios de la Editorial *El Panamá América* (Epsa) son devueltos a la familia Arias y se reabre *La Prensa*. Se inicia un período de desarrollo cuantitativo y cualitativo de los medios y se inauguran nuevas formas de relacionarse con el poder. Paralelo a este crecimiento, se acentúa la tendencia de concentración de la propiedad de los medios en cada vez menos manos, al tiempo que desaparecen las pocas formas de comunicación alternativa existentes. En Panamá, por ejemplo, en términos comparativos con sus vecinos Colombia y Costa Rica, prácticamente no existen medios de comunicación alternativos ajenos a los poderes fácticos (político o económico) y el espacio para la comunicación ciudadana se ha ido reduciendo.

Esto explica que ningún partido político publique en la actualidad un periódico o revista, ninguno mantiene un programa de radio o televisión, ninguno posee una estrategia permanente de comunicación y propaganda.

Salvo algunos pocos programas de radio (espacios pagados) de muy poca audiencia de organizaciones gremiales, no hay en el país medios o espacios con algún nivel de permanencia e influencia en manos de grupos de ciudadanos. Poseer medios de comunicación propios y alternativos no aparece como uno de sus propósitos.

En ese contexto, a los medios de comunicación corresponde –si es verdad que, como predicán, tienen un compromiso social– crear espacios efectivos de participación, generar vocerías sociales y ganar independencia de los intereses políticos-económicos. Pero no ha sido así.

## La agenda de los medios y la de los ciudadanos

Esta nueva fase –de 1990 a nuestros días– se caracteriza por un cada vez mayor protagonismo de los medios masivos de comunicación en la vida nacional, principalmente en la política. Como señala Omar Rincón, “mas que gobernar o hacer política desde la izquierda o la derecha o desde las ideas, se hace comunicación, televisión, melodrama”<sup>8</sup>. En ese nuevo escenario se es consumidor o mercancía, lo demás sobra.

A escala global, la televisión afianza su dominio en el panorama mediático y en la captación del tiempo libre de las personas. Por esta razón, a pesar de lo reducido del mercado interno (la población es de 3.5 millones de habitantes), la oferta televisiva se ha multiplicado, no solo el número de canales, sino la extensión de los horarios de programación. De 1961 a 1980 solo existían dos canales de televisión comercial de cobertura nacional, *RPC TV* y *TVN*<sup>9</sup>, en 1981 abren *Panavisión Canal 5* y *Telemetro Canal 13* (ambas empresas dirigidas por personas vinculados al gobierno de ese momento) y en los años subsiguientes abren seis canales comerciales de televisión abierta más, a saber, *RCM (Radio Cadena Milenium)*, *Hosana Visión*, *Mas 23*, *TV7*, *TV Max* y *Mix TV (Canal 33)*.

Un canal educativo-cultural manejado por la Iglesia Católica, *FETV Canal 5*, sustituyó en 1992 a *Panavisión del Istmo* (empresa controlada de forma indirecta por los militares hasta la invasión del 20 de diciembre de 1989).

El 28 de diciembre de 2005 se crea por ley el Sistema Estatal de Radio y Televisión, que fusiona las estaciones de radio y la televisión estatales. *SERTV*, también de carácter educativo y cultural, es el resultado de un largo proceso iniciado en la Universidad de

<sup>8</sup> Omar Rincón. El juego político de los medios. Periódico El Tiempo. Bogotá, Colombia, sept. 29 de 2008.

<sup>9</sup> También existió una radio y un canal de televisión del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos acantonado en Panamá, de cobertura en las ciudades de Panamá y Colón y un canal estatal educativo de cobertura en la ciudad capital.

Panamá a inicios de la década de los setenta. Este proyecto entre el 2004 y el 2009 intenta ganar autonomía (y en efecto la gana desde el punto de vista administrativo y financiero) y zafarse del enfoque de medios dedicados exclusivamente a la promoción gubernamental para convertirse en un proyecto más diversificado de televisión cultural, de televisión de servicio público, y radioemisoras especializadas con franjas de programación diseñadas y abiertas al debate y la participación ciudadana. Lamentablemente, esta visión colisiona con el enfoque utilitario de usarlo como simple emisor de la comunicación gubernamental.

En general, el incremento de la oferta de canales no se traduce en una mayor diversificación de la propiedad de los medios. Por ejemplo, el 22 de noviembre de 1995 los propietarios de dos de las tres cadenas mas grandes del país, Nicolás González Revilla y Fernando Eleta anuncian la fusión de sus empresas al crear la Corporación Medcom que, además de controlar a *RPC TV* y *Telemetro Canal 13*, suma a los nuevos *Tele 7* y, dos cadenas de radio *RPC Radio* y *Caliente*, tres canales de cable, *Eco Tv*, *Mall Tv* y *Travel Panamá* y es uno de los dos proveedores del servicio de televisión por cable del país. En el caso de *TVN*, obtiene la concesión para la creación de un nuevo canal, *TVmax*, que inicia operaciones en el 2005 con una programación dedicada principalmente al deporte.

En la medida en que crece la industria, se va desdibujando más la pretendida función social de los medios. Por ello, aunque hay cada vez más talento nacional preparado y especializado, principalmente jóvenes egresados de escuelas de cine y televisión de otros países, los nuevos canales prefieren surtirse de enlatados baratos y, en consecuencia, hay mas empresas televisoras panameñas, pero no necesariamente mas producción de televisión nacional. Por ejemplo, en el país no se hacen documentales para la televisión comercial (y cuando los hay, esta se niega a pasarlos), ni videos de ficción cortos o largos y los pocos programas de factura local están dedicados al humor, a una visión costumbrista del folklore o son copias malas de los de competencias que se hacen en todos nuestros países, tipo “¿quién quiere ser millonario?”.

Sí se han multiplicado los espacios informativos y de opinión, pero la agenda de los medios no es igual a la de los ciudadanos. Las noticias se centran en personajes o individualidades y “sólo leen lo que hacer el poder”, porque “la visibilización de lo que hace el poder ha sido una de las funciones importantes del periodismo”<sup>10</sup>.

La contraparte de esa tendencia es la invisibilización de aquello que representa el interés del ciudadano, su suplantación deliberada (por versiones adulteradas de

<sup>10</sup> Ana María Miralles. Periodismo y opinión pública. La agenda Ciudadana de los Medios. Editorial Norma. Bogotá Colombia, 2002.

su realidad) y, en el peor de los casos, la silenciación sistemática de aquellas voces críticas y discrepantes.

Panamá sigue estando entre los tres países con peor distribución de la riqueza en el continente a pesar del crecimiento sostenido de su economía, el aumento significativo de la inversión extranjera la multiplicación de los altos y lujosos edificios, principalmente en la estrecha franja que comprende la zona de tránsito. El 56% de los que ingresan al sistema educativo no termina la secundaria. En Panamá el 40% de las familias de menos recursos recibe el 10.4% del producto interno bruto mientras que el 10% de las familias ricas recibe el 38.6% del PIB<sup>11</sup>.

En esa realidad, la radio y la televisión (la prensa escrita en una proporción menor) se convierten en mecanismo de desahogo del malestar ciudadano. Los medios devienen en eficientes administradores del descontento. Peor aún, esta función se vende como una forma de participación de la gente aunque es, en realidad, una mercancía, un procedimiento para llamar la atención, ganar audiencia.

Implica también sacrificar el sometimiento del contenido de los medios a fines mercantiles (no publicar o emitir aquello que afecta a sus anunciantes es una práctica inveterada de muchos medios en Panamá) y renunciar a la pretensión de chantaje hacia el poder basada en que la influencia de los medios es imprescindible para gozar una percepción favorable, hasta el punto de que nuestra clase política asume que “tener buen prensa” es un atributo indispensable para la gobernabilidad.

## Los medios se tiñen de rojo

La crónica roja es la otra dinámica movilizadora de las franjas informativas de los medios. En Panamá, siempre existió crónica roja pero, desde la invasión militar de 1989, se viene registrando un aumento sostenido de la violencia en todas sus formas con un reflejo, a menudo desproporcional, en casi todos los medios. El espacio que los noticieros dedican a la crónica roja no sólo ha aumentado como resultado del incremento mismo de la criminalidad sino por el uso de la repetición como técnica para mantener al telespectador pendiente de un desenlace. De esta forma, por ejemplo, un mismo crimen se anuncia hasta cinco veces en el mismo noticiero antes de que se puedan conocer los detalles en la nota completa.

<sup>11</sup> Según datos de la Cepal citados por Martes Financiero. La Prensa. 15 de sept. 2009. Pag. 25.

Pero no hay duda de su incremento objetivo, en especial, la violencia asociada al narcotráfico, incluida una de sus derivaciones principales, el pandillerismo, el sicariato (principalmente las ejecuciones por los llamados “tumbes” en el trasiego de la droga o cuentas pendientes). Panamá como país de tránsito, ruta privilegiada del comercio mundial, también es paso obligado de la droga que se produce en el sur (principalmente Colombia) y busca en los Estados Unidos su principal mercado de consumo. A su vez, su centro bancario y financiero, el dólar como divisa de uso corriente, su zona libre de Colón (la mayor de Latinoamérica) y el *boom* inmobiliario, convierten al país en una atractiva plaza para lavar el dinero del narcotráfico. Las autoridades actuales estiman que se movilizan a través de Panamá 250 toneladas de droga al año. En el 2009 se incautaron en el país 54 toneladas de cocaína y en sólo los dos primeros meses de 2010, han sido decomisadas 6 toneladas<sup>12</sup>.

En el caso de los diarios, los de más circulación nacional son los que consagran la mayoría de sus espacios a la crónica roja. En el caso de la televisión, también se vienen registrando cambios en la narrativa mediática misma. Los canales compiten para llegar primero al sitio de la tragedia, hasta el punto que, a menudo, llegan primero que las autoridades y las mismas se ven obligadas a reconocer que se enteraron por la tele.

Las autoridades policiales, que antes se irritaban por la puntual y contaminadora presencia de cámaras en la escena del crimen, ahora agradecen la “cooperación” de los medios y ocasionalmente les invitan a participar de operativos policiales “televisados en vivo y a todo color”, en los que se puede ver cámara y periodista correr en medio de tiroteos y persecuciones.

Mucho se debate sobre la sensación de inseguridad. El temor se convierte en un catalizador social que genera impotencia, pasividad, destruye la autoestima y la voluntad de participar del cambio social. Otro efecto perjudicial que acompaña a las doctrinas de mano dura aplicadas por gobiernos de corte derechista y autoritario.

Otro resultado de esta consciente práctica de enajenación es la evidente discriminación social y étnica que se refleja en la cobertura de los medios de la violencia. La propia dinámica comunicacional ha ido generando nuevas formas, mucho más elaboradas que el simple reporte de un delito o crimen y la nueva tendencia es la judicialización del periodismo, es decir, el proceso mismo se convierte en pasto del sensacionalismo. Se impone una marcada tendencia en los abogados a ganar sus pleitos legales a los medios antes que a los tribunales.



<sup>12</sup> Fabio Agrana. Carteles mexicanos bajan hasta el Canal de Panamá. Agencia EFE, 13 de marzo de 2010.

## El clientelismo y los medios

El otro gran tema de los medios en Panamá es la “politiquería criolla”. Los medios siguen a los políticos con avidez porque muchos tienen conductas inapropiadas, lo que permite construir historias de intrigas entre personajes a menudo corruptos, pintorescos, burdos y hasta procaces.

Adicionalmente, las encuestas de opinión que se realizan en el país indican que la clase política recibe siempre una mala calificación. Para contrarrestar tanta animadversión, se recurre al marketing político convertido en una especie de superciencia moderna. Los asesores de imagen y la publicidad que pueden pagar sustituyen, en buena medida al proyecto, las ideas o las cualidades objetivas del candidato, del diputado, del ministro. De esta forma, para los políticos los medios se convierten en el tinglado en el que se libra la lucha entre lo que se percibe y lo que se es, entre lo que se dice y lo que se hace.

En el caso de Panamá, el resultado de este proceso es una mayor concentración del poder en torno a la figura presidencial, la administración del Estado camina hacia un modelo cada vez más autoritario en el que, como antes de 1968, la democracia se limita al sufragio y los ciudadanos son meros espectadores, receptores de uno u otro subsidio, actos de beneficencia demagógica que en nada contribuyen a la disminución objetiva de su pobreza.

## El poder y los medios en la era de los telepresidentes<sup>13</sup>

Ninguno de los gobernantes de la democracia post-invasión –Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos– gozó de una prolongada luna de miel con los medios. Todos, con distintos énfasis y capacidades, actuaron con apego a las recetas impuestas por la economía global, sin realizar transformaciones de fondo, capaces de cambiar las enormes desigualdades. Más allá de sus intenciones declaradas, de los avances modernizadores del Estado y el desarrollo de proyectos y la construcción de necesarias obras de infraestructura, el alcance de las políticas económicas y sociales no ha tenido un impacto significativo en la lucha contra la pobreza y pobreza extrema.

Por ello, no se puede afirmar que las contradicciones entre poder político y los medios de comunicación tengan un fondo económico-sistémico, al contrario, la

<sup>13</sup> Tomado de Los tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de la democracia. Friedrich Ebert. Bogotá, 2008.

mayoría de los medios en Panamá están fuertemente vinculados a grandes firmas de abogados, empresas inmobiliarias, del sistema financiero, banca y seguros, principales beneficiarios de las políticas económicas de impuestas por los gobiernos.

El control de los medios, como tendencia generalizada en el mundo, a su vez, refleja un cada vez mayor grado de concentración en pocas manos. En el caso de la televisión, el 95% del mercado está en manos de tres grandes empresas: Corporación Medcom, Televisora Nacional-TVN y Cadena de Radio y Televisión Milenium-RCM. Los diarios, a su vez están controlados por tres empresas: Corporación La Prensa (*La Prensa* y *Mi diario*), Editora El Panamá América (*El Panamá América*, *Crítica* y *Día a día*) y el Grupo Wisa-Cima (*La Estrella de Panamá* y *El siglo*).

De distintas maneras dueños, directivos o gerentes de estas empresas han formado parte de distintos gobiernos o forman parte, a su vez, de empresas que contratan con el Estado.

Por otro lado, como un claro indicio de los niveles de influencia que ha ido ganando de la magia de la televisión, presentadores de programas de televisión sin trayectoria, incursionan con cada vez más éxito en la política y muchos han sido y son hoy diputados y ministros. En el actual gobierno se pueden mencionar: el ministro de desarrollo social, Guillermo Ferrufino, –quien es el presentador de un programa que se llama *Que tal si te digo*, en el que cada semana se materializa la aspiración de una persona abatida por la pobreza, enfermedad o tragedia–, la titular de educación, Lucinda Molinar, –quien era la periodista/presentadora de un noticiero de denuncias de problemas de ciudadanos y persecución de respuestas inmediatas de funcionarios<sup>14</sup>–, los diputados oficialistas, Luis Eduardo Quirós, –que era presentador de *Éntrese a ganar*–, Victor Juliao Hijo, de *Un día de suerte* y Luis “agapito” Cleghorn, –exdiputado y hoy embajador de Panamá en Cuba, era uno de los personajes del programa de sátira y humor denominado *La cáscara*–.

La manzana de la discordia en la relación entre el poder político y los medios ha sido y es la corrupción. Sobre este tema, la capacidad de denuncia de los medios (a pesar de que a menudo ha sido tendenciosa y sesgada) ha tenido y tiene mucha importancia para el país frente a la impunidad reinante, hasta el punto de que los ciudadanos perciben que es mayor el castigo a la corrupción que proporcionan los medios (una sanción moral) que el que da un sistema de justicia inoperante y corrupto.

La paradoja radica en que los medios pasan de ser herramienta del clientelismo del candidato durante su campaña, a auditores de su gestión, cuando éste llega al gobierno.

<sup>14</sup> En el caso del ministro Ferrufino pasó de ser modelo de modas a presentador de televisión, no ha estudiado o tenido experiencia previa en disciplinas vinculadas a su cartera y la ministra Molinar, estudió periodismo en Chile y ha reconocido en numerosas ocasiones que no estaba preparada para asumir un cargo de tanta complejidad, no obstante, decidió asumir el reto.

Es importante destacar que todos los gobiernos de estos últimos 20 años, unos más que otros, mantuvieron coqueteos, contradicciones y hasta enfrentamientos con los medios, pero ninguno sucumbió a la tentación de tratar de imponer censura o represión desde el poder. Se interpusieron demandas de calumnia e injuria contra periodistas o propietarios de medios, y estos han tenido que responder ante los tribunales, se hicieron declaraciones airadas contra ellos, pero no se llegó a mayores.

Los gobiernos en esta nueva fase recurren a la Secretaría de Comunicación del Estado, una especie de superministro sin cartera, para manejar las relaciones del gobierno con los medios y administrar la inversión de importantes sumas de pauta publicitaria destinada a defender o promover su gestión. Curiosamente, las funciones de esta secretaría no están claramente definidas en el ordenamiento jurídico (no existe una ley que la regule), ni sus titulares han actuado, en propiedad, como portavoces del gobierno o del presidente de la república o respondiendo a una política pública propuesta o debatida con la sociedad.

Esta secretaría, adicionalmente, concentra y supervisa la labor de las direcciones de relaciones públicas o de comunicación de todos los ministerios y entidades del gobierno. Esta función ha llegado a ser tan centralizada y acuciosa que todos los productos y servicios de publicidad, pauta de publicidad en medios, anuncios (avisos pagados, baners, afiches, que se insertan en publicaciones), la vallas o letreros de calle y todo lo que se imprime o edita requieren primero el visto bueno de la secretaría. Por absurdo que sea, este control se ha mantenido de gobierno a gobierno.

En el caso de la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), cuyo rasgo distintivo fue aplicar las recetas y cumplir los compromisos del llamado consenso de Washington (principalmente la privatización de las empresas de servicio público, rebaja de aranceles y facilitar la inversión extranjera), da el primer gran impulso modernizador del modelo de gestión del Estado, la construcción de algunas importantes obras de infraestructuras (corredores y carreteras) y prepara con eficiencia las condiciones para el traspaso de la administración del Canal a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.

Durante los cinco años de su gobierno, Pérez Balladares se esmeró por proyectar un perfil afable, pero su personalidad –calificada de arrogante por los medios– y el impacto negativo de sus políticas económicas en el bienestar de los sectores medios y pobres disminuyó su popularidad. Aunque se produjeron acusaciones de corrupción contra su gobierno, estas fueron quedando entrampadas en el frondoso sistema judicial panameño<sup>15</sup>. Adicionalmente, casi al final de su mandato, intentó,

<sup>15</sup> Pérez Balladares es investigado actualmente por el delito de blanqueo de capitales.

proyectando una costosa campaña de publicidad, aprobar una reforma constitucional para su reelección inmediata que resultó en un estrepitoso fracaso.

En el caso de la administración de Mireya Moscoso (1999-2004), que heredó de la administración anterior la ley de Transparencia (una conquista de organizaciones de la llamada sociedad civil), uno de sus primeros actos de gobierno fue inhabilitar su aplicación y así se mantuvo durante los cinco años de su gestión, pese a la permanente presión de los medios que veían, como quedó demostrado, que esta medida no tenía otra intención que la de ocultar numerosos actos de corrupción gubernamental.

Mientras los escándalos de corrupción se multiplicaban, la presión a favor de la institucionalización de las herramientas de transparencia fue en aumento, especialmente desde los medios de comunicación.

La administración de Martín Torrijos (2004-2009) levantó el cerco sobre la ley de transparencia y eliminó las llamadas leyes mordaza mediante la aprobación de la ley 22 de 2005 que deroga la Junta Nacional de Censura y elimina la figura del desacato que permitía a cualquier funcionario con mando y jurisdicción imponer sanciones (pecuniarias o de privación de libertad) si consideraba que periodistas en el ejercicio de sus funciones le calumniaba o injuriaba.

Torrijos también adoptó, como resultado de la necesidad de modernizar la gestión del Estado, mecanismos promotores de la transparencia y la rendición de cuentas (Panamá Compra, Panamá Tramita, Sígueme, Denuncia ciudadana, etc.) que facilitan la labor de los ciudadanos y los medios para investigar y detectar el desgüeño o la corrupción en los procesos de compras y contratación del Estado.

Se fortalecen las instancias de participación ciudadana y los mecanismos de promoción del consenso sobre problemas de gran calado. Se dieron garantías y abrieron espacios para el debate nacional que antecedió al referéndum de aprobación de la ampliación del canal, se convocó a la discusión y aprobación del llamado Pacto de Estado por la Justicia y se realizó el esfuerzo de Concertación Nacional para el Desarrollo con una amplia participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil. Este último esfuerzo culminó con una agenda de compromisos, plazos y la consignación de los aportes que debía hacer el Estado para el financiamiento de los proyectos.

No obstante, la gestión de Martín Torrijos no estuvo exenta de acusaciones de corrupción, principalmente se le ha cuestionado el otorgamiento oneroso para el Estado de concesiones a grandes empresas y la contratación de empresas de dudoso origen o trayectoria que incumplieron la realización de obras como la reparación de escuelas y otras.

## Las elecciones de 2009, el salto al pasado

Si algo define el torneo electoral que culminó el 3 de mayo de 2009 es la total ausencia de ética y la prevalencia absoluta del dinero como motor principal de los comicios.

En palabras del sociólogo Raúl Leis: “En Panamá inscribir partidos, candidatizarse, propagandizar, en otras palabras agitarse decisivamente en el campo político, pasa por las altas cifras de las cuentas bancarias. Esto es esencialmente antidemocrático y abre las puertas para la corrupción”<sup>16</sup>.

Es cierto que la palanca principal del discurso del candidato del Partido Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, ultraderechista y dueño de la principal cadena de supermercados del país, fue capitalizar el descontento acumulado por los gobiernos anteriores en el seno del electorado. Que el electorado comprara la promesa de Martinelli de ser un empresario multimillonario “distinto a los políticos de siempre, que entran pobres al gobierno y salen millonarios”, a pesar de que su trayectoria personal y política decía exactamente lo contrario<sup>17</sup>, fue el resultado de una operación mediática de gran escala.

No se puede medir con exactitud el costo de una campaña política en el país, pero numerosos medios locales coinciden en que el candidato Ricardo Martinelli gastó 40 millones y su adversaria, Balbina Herrera, 4 millones. En el caso de Martinelli el costo real es mucho mayor si se toma en cuenta que su campaña duró ocho años (ya que fue candidato perdedor de las elecciones anteriores) durante los cuales nunca dejó de pautar publicidad a favor de su candidatura.

De acuerdo con Contraloría General, durante el primer trimestre de 2009 la inversión publicitaria fue de 100 millones 113 mil dólares mientras que en el mismo período del año anterior fue de 67 millones 679 mil, lo que refleja un incremento de 47.9% en comparación al mismo período del año anterior<sup>18</sup>. Según datos de la empresa Ibope-Panamá, se destinaron 248 millones de dólares a publicidad durante el año 2009, de ellos 159.9 en televisión y 48 en diarios<sup>19</sup>.

Si tomamos en consideración que solo los 4 primeros meses del año 2009 corresponden al período de campaña (las elecciones fueron el 3 de mayo) y los efectos

<sup>16</sup> Raúl Leis. Retrato escrito de la corrupción. Fundación Friedrich Ebert. Primera edición. Oct. 2009.

<sup>17</sup> Martinelli, ha sido presidente y candidato presidencial de su partido, Cambio Democrático, desde su fundación. Fue director de la Caja de Seguro Social en el gobierno de Pérez Balladares y ministro del canal del de Mireya Moscoso.

<sup>18</sup> La Estrella de Panamá, 23 de mayo de 2009.

<sup>19</sup> El Panamá América, 5 de noviembre de 2009

que sobre el mercado publicitario debía tener la crisis financiera global, podemos concluir que buena parte de ese incremento es atribuible a las elecciones<sup>20</sup>.

El dinero también resulta imprescindible para armar las llamadas campañas sucias (el uso sistemático de la mentira, las calumnias, el insulto, la fabricación o falsificación de expedientes, ataques a la vida personal, difusión de rumores, etc.). Este tipo de estrategia se impuso en el proceso electoral desde las primarias tanto dentro del oficialismo (el candidato Juan Carlos Navarro echó mano de ella) como en la oposición (Martinelli usó todas las armas, lícitas o no, para atacar de forma inmisericorde al candidato del Panameñismo y, después de doblegarlo, sumarlo a su candidatura, estrategia que le aseguró el triunfo). En ambos casos, Juan Carlos Navarro y Juan Carlos Varela terminaron siendo candidatos a la vicepresidencia de las dos alianzas participantes.

El espectáculo de las campañas sucias –en su edición del 2009– no tuvo límites porque, por primera vez en veinte años, uno de los candidatos, Ricardo Martinelli, se negó a suscribir el pacto ético promovido por el Tribunal Electoral con la Iglesia Católica como garante.

Por otro lado, aunque no se conocen estudios en rigor, el desbalance no fue solo en materia de pauta publicitaria contratada, también la mayoría de los propios medios, sus franjas o secciones de noticias dedicadas a la cobertura del proceso electoral, se parcializaron a favor de una candidatura, lo que implica una zona gris respecto a si también se compró esta parcialización en forma invisible.

De acuerdo a Vielka Vásquez, exdecana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional y actual presidente del Consejo Nacional de Periodismo, “hubo manipulación de los medios a favor de una candidatura” y “para nada se buscó la objetividad y el equilibrio informativo”<sup>21</sup>.

Un ejercicio simple de monitoreo cuantitativo y cualitativo de los espacios dedicados a informar del proceso electoral da cuenta de una evidente inclinación a favor del candidato Martinelli (principalmente en los canales de televisión).

Quizás el mejor ejemplo de esta parcialización sea la cobertura del caso de David Murcia Guzmán, un colombiano acusado de lavado de dinero en Colombia, Estados Unidos y Panamá, detenido y entregado –de forma expedita– por el gobierno de Martín Torrijos al gobierno colombiano y extraditado luego a Estados Unidos donde espera juicio.

<sup>20</sup> La comparación entre el 2008 y 2009 es un indicador pero no refleja la realidad del gasto en publicidad electoral porque el candidato Martinelli mantuvo publicidad pagada en los medios durante los cinco años de la administración de Martín Torrijos y las elecciones primarias del PRD también significaron cifras millonarias en este rubro durante todo el 2008.

<sup>21</sup> Entrevista con el autor. 1 de marzo de 2010.

Estando en la cárcel de mayor seguridad de Colombia y habiéndose negado, al menos dos ocasiones, a declarar ante las autoridades panameñas, Murcia es trasladado a una especie de suite para que conceda una entrevista exclusiva a un canal de televisión panameño, del cual es accionista el candidato Martinelli, en la que acusó a la candidata oficialista a la presidencia, Balbina Herrera, y al candidato oficialista a la alcaldía capitalina, Roberto Velásquez, de haber recibido millones de dólares para sus respectivas campañas.

La entrevista arreglada, dada en condiciones inexplicablemente especiales, editada convenientemente (omitiendo los comentarios de Murcia a favor de Martinelli) tuvo un efecto demoledor en ambas campañas, en especial para el candidato a alcalde Roberto Velásquez debido a que tres escoltas del Servicio de Protección Institucional (responsables de proteger al presidente, sus ministros, etc.), declararon haberlo visto salir con un maletín de una reunión con Murcia en un hotel de la localidad. Como era de esperarse, el escándalo se convirtió en el centro del debate electoral.

Sospechosamente, los guardaespaldas que acusaron a Velásquez, estaban asignados al servicio de la ex-presidenta panameñista Mireya Moscoso (dirigente del partido más grande de la alianza que apoya a Martinelli). Estando al servicio de Moscoso, los agentes fueron “recomendados” a Murcia para que trabajaran para él “en sus horas libres” en su custodia personal.

Vencido el valor de uso del escándalo, al inicio del nuevo gobierno, los tres agentes del Servicio de Protección Institucional, que habían sido destituidos de sus cargos por una clara violación al reglamento interno que les prohíbe servir como guardaespaldas de terceros (mucho menos a un capo mafioso), fueron premiados por Martinelli con su reintegro al servicio activo y el fiscal que llevaba el proceso contra Roberto Velásquez, decidió, finalmente, el archivo del proceso por falta de evidencias y ordenó su sobreseimiento definitivo. Los medios, que en campaña hicieron por semanas sus primeras planas con el caso Murcia, apenas consignaron la información del pronunciamiento final de la justicia panameña.

## El nuevo gobierno y los medios de comunicación

Una vez en el poder, el presidente Martinelli (2009-2014) ha asumido en el gobierno el mismo método y estilo mediático que mantuvo en campaña. Ha continuado el bombardeo frecuente de *spots* publicitarios de radio y televisión narrados en primera persona y en persona por el propio presidente. El manejo mediático es una coreografía que encubre la personalización del poder.

Para marcar la diferencia, para dejar de parecer un candidato y parecer un presidente, asume un tono autoritario y en algunas de sus apariciones televisadas, mazo en mano, derriba muros o cercas de propiedades que considera ocupadas ilegalmente por empresarios, transgrede la separación de poderes y hace declaraciones

amenazantes a sus adversarios políticos, a la dirigencia sindical que protesta en las calles, a los delincuentes comunes.

Aunque el presidente sigue disciplinadamente una elaborada agenda mediática, la abismal contradicción entre lo prometido en campaña y lo hecho en el gobierno ha puesto a los medios de comunicación en estado de alerta y las denuncias de actos contra derecho, de abuso de autoridad y de corrupción comienzan a multiplicarse.

La primera falta a sus promesas de campaña fue el traslado directo de personal de su entorno y confianza de sus empresas a la dirección del gobierno, incluidos cargos cuya designación no corresponde al ejecutivo como el de la contraloría general de la nación, en el cual impuso a la contadora de su cadena de supermercados y el designado para encargarse de la procuraduría general de la nación, un abogado que durante más de un año fue portavoz de su candidatura en un programa de televisión. Lo mismo ocurrió con el servicio exterior y los consulados que fueron repartidos entre las familias que apoyaron económicamente su candidatura.

El designado para la secretaría de comunicación del Estado es Alfredo Prieto (empresario español, exdueño de *RCM*, un canal de televisión, una tienda de licores que surte a la presidencia y un *push-boton* o motel de ocasión) acusado por numerosos periodistas locales de presionar a los medios por la publicación o emisión de informaciones cuyo contenido considera lesivo a la imagen del gobierno (el periodista Álvaro Alvarado y el comentarista político Juan Carlos Tapia se han quejado públicamente de la presión y hasta amenazas del secretario Prieto).

Preguntada sobre la relación del gobierno con el presidente Martinelli, Vielka Vásquez, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo dijo que “es muy fría y tensa y de total indiferencia hacia los gremios de periodistas”. Vásquez dijo conocer de tentativas de limitar e interferir en la labor de los medios de comunicación, “conocemos de presiones a ciertos periodistas y medios manejadas por debajo de la mesa” que no han llegado a presentarse formalmente.

Prieto, igual que sus antecesores, centralizó el presupuesto publicitario del Estado pero, en vez de someter la pauta a un criterio de selección, decidió negociar y contratar directamente con los dueños de los medios.

La mayor prueba de la manipulación en el manejo de la publicidad del Estado la dio el propio presidente Martinelli cuando, a cuestionamiento de periodistas por un contrato directo dado por su gobierno a una empresa de su hermana respondió airado: “¿y el millón de dólares que el Estado contrata directamente con *TV2*, *TV4* y *TV13*?”<sup>22</sup>. Solo el diario *La Prensa* se rehusó por razones éticas a aceptar la oferta de



<sup>22</sup> Citado por Roberto Eisenman, *La Prensa*, 26 de febrero de 2010.

un contrato directo por un millón de dólares para publicidad del Estado. Más adelante en esas mismas declaraciones, Martinelli, afirmó que los canales de televisión “por el vil metal y la búsqueda del *rating* practican un periodismo de pacotilla”.

La bronca del nuevo gobierno con los medios había tenido un capítulo previo con unas declaraciones de su ministro de gobierno y justicia, José Raúl Mulino, en las que afirmó que la mayoría de los periodistas eran unos emplanillados (léase asalariados) del gobierno. Mulino trató de negar las declaraciones pero varias personas presentes en el momento de sus declaraciones lo refutaron tajantemente: Vielka Vásquez, según relata el diario *La Estrella de Panamá* del 12 de noviembre de 2009, se presentó al noticiero de Telemetro junto a Guido Rodríguez, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa y director del *Panamá América* y coincidieron en que Mulino dijo que “entre los periodistas panameños lo que impera es la ética del billete (...) y que existe una lista de periodistas emplanillados”.

La lucha contra la corrupción fue encargada a un primo del presidente, Fernando Núñez Fabrega<sup>23</sup>, que sólo ha perseguido los supuestos actos de corrupción del gobierno anterior e hizo modificar el decreto que crea el Consejo Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para, entre otras cosas, eliminar la participación de todos los representantes de organizaciones de la sociedad civil, a saber: Transparencia Internacional, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Defensoría del Pueblo y de gremios de periodistas.

Los primeros meses del gobierno han develado una estrategia dirigida al control de todos los órganos del estado. El caso más emblemático es la complicada maraña de maniobras que condujo al control de la Corte Suprema de Justicia (designando a contrario sensu de sus promesas electorales a dos allegados del presidente de cuestionada trayectoria) y la separación forzada del cargo de la procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, con lo cual, Martinelli se asegura el control del sistema judicial, concentración de poder sólo comparable a la que, en su momento, tuvieron los gobiernos militares.

El procurador encargado por Martinelli, Giuseppe Bonissi, ha removido, trasladado o provocado la renuncia de decenas de fiscales, pero la inestabilidad también amenaza a jueces y magistrados ya que en octubre de 2009, con apenas 100 días de gobierno, el ministro de la presidencia, Demetrio Papadimitriu dijo al diario *La Prensa* que “el ejecutivo analiza una fórmula que permita dejar en la interinidad a los jueces

<sup>23</sup> Núñez Fábrega fue cónsul de Panamá durante el gobierno de Martín Torrijos en Tampa, Florida y en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur y director financiero de seguridad pública del gobierno de Mireya Moscoso.

y magistrados que hoy forman parte de la Carrera Judicial, a fin de llegar a los niveles de satisfacción y seguridad en términos de calidad, eficacia y eficiencia”<sup>24</sup>.

Aunque la injerencia del ejecutivo en el sistema judicial ha servido inicialmente para perseguir a dirigentes del principal partido de oposición investigados por actos de corrupción, nada impide que ese control pase a constituirse en un blindaje de impunidad para su propia gestión en el futuro.

Algo similar ocurre con el legislativo, puesto que, no conforme con tener mayoría en la Asamblea de Diputados, la actual administración ofrece abiertamente prebendas a los diputados de oposición a cambio de su adhesión (provocando deserciones en el opositor PRD). El comercio de prebendas alcanza por igual a alcaldes y representantes de corregimiento de los partidos que no forman parte de la alianza gobernante, pero la “piratería política”, como se ha bautizado localmente a estas prácticas, se da incluso entre miembros de la alianza oficialista en la que actualmente se libra una encarnizada batalla por evitar que el partido de Martinelli termine devorándose a sus aliados.

El gobierno también le ha declarado la guerra a las organizaciones de la llamada sociedad civil que se han atrevido a calificar de arbitrarias sus actuaciones y advertir sobre el peligro que ellas entrañan. La Alianza Ciudadana Pro Justicia, integrada por 15 organizaciones de la sociedad civil panameña y la Fundación para el Debido Proceso (Ong domiciliada en Washington DC) se presentó el 22 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la crisis institucional por la que atraviesa la administración de la justicia en Panamá.

En nota de solicitud de audiencia temática, dirigida a su secretario ejecutivo, Santiago Cantón, la Alianza Ciudadana Pro Justicia sostiene: “unido a esta situación de crisis que vive el poder judicial, la actitud del poder ejecutivo frente a la sociedad civil, negándole participación real en los temas y acusándola de buscar atención por temas políticos es otra razón de mucha preocupación”<sup>25</sup>. Mas adelante en la misiva se enumeran las “serias e infundada inculpaciones” contenidas en pronunciamientos públicos del ejecutivo contra la sociedad civil, las que, “por su fuerza, tienen el efecto de amenazar la libertad de expresión de estos grupos y sus integrantes”.

<sup>24</sup> La Prensa, 30 de diciembre de 2009. Sección Panorama, nota de José González Pinilla: Cambios a la constitución. También el presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Víctor Lewis, envió una carta al ministro Papadimitriou en la que sostiene que su propuesta de borrón y cuenta nueva de magistrados y jueces atenta contra independencia del poder judicial y crea un clima de inseguridad jurídica que daña la imagen del país.

<sup>25</sup> Versión en PDF del [www.alianzaprojusticia.org.pa](http://www.alianzaprojusticia.org.pa)

El propio presidente Martinelli intentó descalificar la audiencia temática ante la CIDH, afirmando que se trataba de “tres personas armando un zaperoco” y agregó que “ese alboroto es para buscar atención, porque creen que no los toman en cuenta”<sup>26</sup>. Por su parte, el ministro de la presidencia, Demetrio Papadimitriu calificó la comparecencia como “un *show* en el que hay muchos intereses de por medio” y “un disparo en el pie” porque afecta nuestra imagen ante los inversionistas extranjeros.

También la Cruzada Civilista, la misma que encabezó la lucha en las calles contra el general Noriega entre 1987 y 1989, convocó a una movilización el 3 de febrero pasado para protestar por la “peligrosa concentración de poder de Ricardo Martinelli”<sup>27</sup>. Los enfrenamientos también alcanzan a las organizaciones sindicales, cuyas manifestaciones han sido reprimidas violando sus derechos constitucionales<sup>28</sup> y el gobierno ha anunciado cambios en el Código del Trabajo destinados a anular su capacidad de presión y movilización.

Los medios tampoco quedan por fuera, Ebrahim Asvat, presidente de los diarios *El Siglo* y *La Estrella de Panamá*, señaló que el gobierno sigue “una dirección equivocada” y está “llevando al país hacia un régimen totalitarista”. También el diario *La Prensa* ha dedicado numerosos editoriales al rumbo que sigue el gobierno, en su edición del 4 de febrero se afirma: “Martinelli será recordado como el mayor defraudador de la fe y la esperanza de los panameños”.

El desenfado que ha caracterizado las declaraciones del presidente contra aquellos que considera sus adversarios, tiene réplicas en el plano internacional. Martinelli se ha esforzado por ocupar un lugar destacado dentro de la ultraderecha más recalcitrante y su principal referente es Silvio Berlusconi, personaje hacia el cual ha declarado su mayor admiración. Con apenas 60 días en el gobierno viajó junto a su familia a Italia y aprovechó ese escenario para autoproclamarse “el antichavez de América”.

En ese mismo contexto, rompiendo una tradición de, al menos 30 años de política exterior panameña basada en el principio de neutralidad (consagrado en el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal), Martinelli ha emprendido una peligrosa carrera de alineación a la ultraderecha, sin importar las consecuencias que pueda tener para las relaciones de Panamá con el mundo. Su declaración, durante su visita a ese

<sup>26</sup> Marzo 25, diario *La Prensa*.

<sup>27</sup> Declaraciones de su dirigente, Aurelio Barría al noticiero Telemetro Reporta del 1 de febrero.

<sup>28</sup> Mas de 200 personas –incluidos algunos no relacionados con las protestas– arrestados durante enfrentamientos callejeros con la Policía Nacional. Estas personas fueron privadas de su libertad ilegalmente durante cuatro días consecutivos, sin que se le formularan cargos formalmente, sin derecho a defensa legal y sin derecho a visita de sus familiares.

país, de que “Israel es el guardián de Jerusalén” provocó la ira del mundo árabe. Su defensa del gobierno golpista de Honduras y su adhesión al gobierno colombiano de Alvaro Uribe son claros ejemplos de este contrasentido<sup>29</sup>.

## A manera de conclusión

El ingreso al nuevo siglo significó para Panamá, gracias a la recuperación del Canal y la salida de las bases militares norteamericanas de su territorio, la mayor oportunidad de su historia para forjar un nuevo pacto social destinado a construir un modelo de desarrollo incluyente, capaz de derrotar la pobreza y pobreza extrema.

Hoy, en vez de fortalecer la institucionalidad e incrementar la participación ciudadana para profundizar nuestra democracia, el país vuelve a encaminarse por la senda de un presidencialismo concentrador de todos los poderes del Estado. En vez de incrementar cualitativa y cuantitativamente la participación ciudadana para fortalecer la democracia, se profundiza el proceso de creciente privatización de lo público basado en la creencia de que todo, incluido el beneficio de los votantes, se puede comprar o vender.

La premisa parece ser que, si los medios sirvieron tan eficazmente para ganar las elecciones, también deben servir para conservar el poder. Por ello, las presiones dirigidas a silenciar su capacidad crítica han arreciado hacia sus propietarios y hacia sus periodistas. El sesgo y la manipulación de la información sobre la gestión del gobierno se hacen evidentes pero, aunque los medios pueden magnificar o disminuir el impacto de un acontecimiento o una declaración, no pueden inventar la realidad y, siempre que tenga valor, están obligados a difundirla toda vez que el derecho a la información es un derecho humano elemental.

En efecto, se requiere una conducta ética en los medios porque el clientelismo puede alcanzar a periodistas y dueños. De hecho, el presidente, el vicepresidente de la república y el secretario de comunicación de la presidencia son codueños de canales de televisión, radioemisoras y las empresas de muchos de los integrantes del gobierno actual son patrocinadores importantes de los medios de comunicación. De allí la gravedad que representa la intención manifiesta de utilizar la pauta publicitaria del Estado o privada como mecanismo de coacción de los medios. Esta práctica –que no es exclusiva del gobierno actual– constituye una amenaza al ejercicio del periodismo, a la independencia de los medios y al principio de libertad de expresión.

<sup>29</sup> Adicionalmente, la persona más influyente del gobierno, el ministro de la presidencia, Demetrio Papadimitriou milita en el Partido Republicano de los Estados Unidos, una empresa norteamericana de asesoría de imagen, contratista de ese mismo partido, trabaja para Martinelli. Para su seguridad personal, Martinelli contrató a una empresa israelí que utiliza agentes de la Mossad.

Si la libertad de expresión está amenazada para dueños de medios y periodistas, ¿qué decir de la libertad de expresión de los ciudadanos?

Finalmente, sin desestimar la importante tarea de democratizar el acceso a los grandes medios y defender su independencia, urge construir medios de comunicación alternativos eficaces que acompañen al proceso de construcción de un poder ciudadano llamado a hacer la transformación total del sistema político. Este esfuerzo implica crear una nueva cultura política.

### La relación Medios y Estado en Panamá

Los medios de comunicación reflejan las tensiones políticas y sociales por las que pasa la sociedad panameña y se convierten en uno de los principales mecanismos de denuncia y oposición al poder.

En la siempre presidencialista sociedad panameña, los ciudadanos son vistos desde el poder como una clientela a la que hay que seducir cada cinco años y los medios de comunicación se han convertido en el principal instrumento de esa seducción. Pero una vez en el gobierno, descubiertas sus verdaderas intenciones, poder y medios terminan irremediablemente enfrentados.

Los medios están pasando por un mal momento ante el poder cínico y totalitario del actual presidente... y a los ciudadanos les va peor.